

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**



**JUZGADO NOVENO DE FAMILIA EN ORALIDAD DE BOGOTA D.C.**

Bogotá, D.C., 29 de mayo de 2023--

**Medida de protección No. 025-2020 Comisaría 14  
Radicado Juzgado 2021-00761**

Procedentes de la Comisaría Catorce de Familia – Los Mártires de esta ciudad, han llegado las presentes diligencias para que se surta el grado de consulta en relación con el acto administrativo allí proferido el 7 de diciembre de 2022, a través del cual, entre otras decisiones, se declaró probado el segundo incumplimiento a la medida de protección por parte de la señora **ELIZABETH ANGARITA GARCIA** y se le sancionó con arresto de 30 días.

**ANTECEDENTES:**

El señor JUAN LEANDRO PINZON SANCHEZ en representación de su menor hija ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA presentó solicitud de medida de protección contra la señora ELIZABETH ANGARITA GARCIA la cual culminó con la resolución de fecha 10 de marzo de 2020 mediante la cual, entre otras decisiones, impuso medida de protección definitiva en contra de la señora ELIZABETH ANGARITA GARCIA.

Mediante el acto administrativo proferido por la Comisaria de origen el día 9 de noviembre de 2021 se impuso a la incidentada multa por haber cometido actos de violencia intrafamiliar, la cual fue confirmada por este Despacho mediante sentencia del 19 de noviembre de 2021.

Con ocasión a que el señor JUAN LEANDRO PINZON SANCHEZ, puso en conocimiento que la señora ELIZABETH ANGARITA GARCIA nuevamente agredió a su hija ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA, la citada Comisaría adelantó el correspondiente incidente y le dio el trámite de ley.

Llegados el día y hora se celebró la audiencia; la Comisaría competente en resolución que aquí se consulta declaró entre otras cosas, probado el incumplimiento por parte de la señora **ELIZABETH ANGARITA GARCIA** a la medida de protección y lo sancionó con arresto de 30 días.

Expuesto lo anterior, el despacho entra a resolver este asunto, previas las siguientes:

## **CONSIDERACIONES:**

Mediante la Ley 294 de 1996, reformada por la Ley 575 de 2000, se desarrolló el artículo 42 de la Constitución Nacional, previendo en su art. 4º, *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de un daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil o Promiscuo Municipal, una medida de Protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que este se realice cuando fuere inminente”*.

### ***¿Qué es violencia psicológica?***

36. La violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo<sup>[1]</sup>.

37. Al estudiar este tema, la Organización Mundial de la Salud presentó el precitado Informe titulado “Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer (2005)”<sup>[2]</sup>. De los resultados de las investigaciones se destacan las conclusiones referentes al **maltrato psíquico** infligido por la pareja a la mujer, pues se establece que el mismo es sistemático y en la mayoría de los casos es más devastador que la propia violencia física.

En el Estudio<sup>[3]</sup> se identificaron los actos específicos, que para la OMS son constitutivos de dicho maltrato psicológico<sup>[4]</sup>, así:

- Cuando la mujer es insultada o se la hace sentir mal con ella misma;
- cuando es humillada delante de los demás;
- cuando es intimidada o asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas);
- cuando es amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien importante para ella).

Es así como en contra de la Resolución de incumplimiento de la medida de protección es procedente su consulta, con el fin de determinar si debe revocarse o no la decisión (artículo 12 D.R. 652 de 2001).

Es importante resaltar lo consagrado por la Constitución Política en su artículo 42-5 que reza: *“Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y*

*deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley”.*

En desarrollo de las normas referidas, se expidieron las leyes 294 de 1996 y 575 del año 2000, encaminadas a *“garantizar los derechos de los miembros más débiles de la sociedad (menores, ancianos y mujeres), erradicar la violencia de la familia; es objetivo en el cual está comprometido el interés general, por ser la familia la institución básica y núcleo fundamental de la sociedad, y por ser un espacio básico para la consolidación de la paz”*. Sentencia C-285 del 5 de junio de 1997, Corte Constitucional.

La H. Corte Constitucional en sentencia T 027/17 M.P. AQUILES ARRIETA GÓMEZ señaló: *“La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una “(...) situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”. En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar...”*

El art 2º de la ley 1257 de 2008 define la violencia contra la mujer:

***“Artículo 2º. Definición de violencia contra la mujer.*** *Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.*

*Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”*

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 busca el respeto, la protección y dignificación de la persona humana, la familia adquiere una especial connotación como núcleo fundamental de la sociedad para la existencia tanto de aquella como de la organización política y social, configurándose, entonces, en sujeto de amparo y protección especial por parte del Estado, como institución básica de la sociedad. En sentencia proferida por la Corte Constitucional<sup>[9]</sup>, se afirmó al respecto *“Así las cosas, la institución de la familia merece los mayores esfuerzos del Estado para garantizar su bienestar. De ahí que corresponda a las autoridades intervenir en*

*las relaciones familiares, no con el fin de fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita del derecho a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus integrantes. Así se deduce del contenido del artículo 42 de la Carta cuando señala: “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.....Precisamente, en desarrollo de la preceptiva constitucional antes citada, el legislador, mediante la ley 294 de 1996, ha creado un sistema normativo cuyo propósito radica en prevenir, corregir y sancionar la violencia intrafamiliar, a través de medidas pedagógicas, protectoras y sancionadoras que permiten a las personas solucionar sus desavenencias familiares por medios civilizados como el diálogo concertado, la conciliación y, en fin, otros medios judiciales, proscribiendo cualquier comportamiento agresivo o violento. Este procedimiento especial aumenta los mecanismos de acción del Estado, en lo que tiene que ver con la protección de las personas que han sido víctimas de actos violentos o amenazas por parte de alguno de sus familiares o de terceros. (Los otros mecanismos de protección aparecen consignados, entre otros, en el Código Penal y en el Código del Menor)...”.*

De igual forma, es menester traer a colación lo dispuesto en el art. 18 de la misma codificación establece: *“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.*

*Para los efectos de este código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.”*

El artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia señala que *“en toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta”.*

Frente a este tema la Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho de los niños y niñas a ser escuchados en el marco de cualquier acción judicial o administrativa. En sentencia T-844 de 2011, reiterada en la sentencia T-276 de 2012 indicó:

*“Siguiendo las recomendaciones que emitió el Comité sobre los Derechos del Niño acerca de esta importante garantía, la Corte considera relevante señalar que la opinión del menor de dieciocho años debe siempre tenerse en cuenta en donde la razonabilidad o no de su dicho, dependerá de la madurez con que exprese sus juicios*

*acerca de los hechos que los afectan, razón por la que en cada caso se impone su análisis independientemente de la edad del niño, niña o adolescente.*

*Se ha indicado que la madurez y la autonomía de este grupo de especial protección no están asociadas a la edad, sino a su entorno familiar, social, cultural en el que se han desenvuelto. En este contexto, la opinión del niño, niña y adolescente siempre debe tenerse en cuenta, y su “**madurez**” debe analizarse para cada caso concreto, es decir, a partir de la capacidad que demuestre el niño, niña o adolescente involucrado para entender lo que está sucediendo”. (resaltado del texto).*

La violencia intrafamiliar en la Ley 294 de 1996 fue definida como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de estos incluyendo hijos adoptivos y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad familiar.

Como principales manifestaciones de la violencia psicológica, según diversos autores podemos clasificar diferentes conductas de violencia psicológica habituales en las situaciones de malos tratos:

Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, poner en tela de juicio la cordura de la víctima.

Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia, haciéndole pedir dinero, solicitando justificación de los gastos, dándole un presupuesto límite, haciendo la compra para que ella no controle el presupuesto, etc.

Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar amistades, restringir las relaciones con familiares, etc.

Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destrozar la propiedad. Mostrar armas. Cambios bruscos y desconcertantes de ánimo. El agresor se irrita con facilidad por cosas nimias, manteniendo a la víctima en un estado de alerta constante.

Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños, hacer daño a los animales domésticos, amenazar con irse o echar al otro de casa.

Desprecio y abuso emocional: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin consultarle, utilización de los hijos, prácticas de privilegios masculinos. Se la denigra intelectualmente, como madre, como mujer y como persona. Negación, minimización y culpabilización.

De otra parte, conforme al art. 7º de la Ley inicialmente aludida, esto es, la 294 de 1996, en caso incumplimiento por primera vez de la medida de protección, es viable la sanción pecuniaria entre 2 y 10 salarios mínimos legales, y en caso de **reincidencia dentro de los 2 años la sanción será arresto entre 30 y 45 días.**

A efecto de determinar los hechos denunciados como incumplimiento a la medida cautelar se recaudaron las siguientes pruebas:

- Descargos presentados por la señora ELIZABETH ANGARITA GARCIA quien niega haber proferido agresiones físicas o verbales hacia su hija.
- Entrevista Psicológica realizada a la menor ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA por el área de psicología de la Comisaría de Familia, en la que relata diferentes hechos de agresión física, verbal y psicológica por parte de su progenitora.
- Audios aportados por la parte incidentada, respecto de los cuales la comisaría únicamente tuvo en cuenta las conversaciones entre ella y el señor JUAN LEANDRO PINZON SANCHEZ, de las cuales se evidencia una relación conflictiva entre los progenitores de la menor.
- Informes allegados por la Clínica de Nuestra Señora de la Paz e Historia Clínica, en que se establece como diagnóstico trastorno mixto de la conducta y de las emociones, no especificado, .

Valorando las pruebas recaudadas se observa que efectivamente la señora **ELIZABETH ANGARITA GARCIA** incumplió la medida de protección interpuesta en su contra en razón a la realización de actos de violencia intrafamiliar, en contra de la menor ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA, consistentes en agresiones físicas, verbales y psicológicas. Lo anterior con fundamento en la entrevista realizada a la menor ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA, quien en su relato refirió haber sido víctima de agresiones por parte de su progenitora, al indicar que su progenitora le pega con el cable del celular, hecho que puso en conocimiento de la profesora del colegio, que su mamá la gritaba, le pegaba, le halaba el cabello y la arrastraba por el piso, la insultaba diciéndole *“perra por qué tuviste que nacer”, “eres la peor hija del mundo”*, también asegura que le pegaba patadas, indicando que estos comportamientos se daban todo el tiempo.

Aunado a ello se cuenta con el concepto de médico tratante remitido por la Clínica de la Paz, en que se indica: *"PACIENTE TRAIDA POR REMISION DE PSIQUIATRIA INFANTIL DE ROOSEVELT POR IDEAS AUTOLITICAS SECUNDARIAS A DISFUNCION FAMILIAR GRAVE, AQUI HABIA VENIDO EN ABR 2021 CON MAMA POR SINTOMAS SIMILARES, SE INTERNA PARA CONTENCIÓN Y SE ENCUENTRA Q HAY UNA SEVERA LUCHA DE PODERES ENTRE MADRE Y PADRE POR LA NIÑA, ADEMAS QUE LA JOVEN PRESENTABA RETROSPECTIVAMENTE EVALUANDO SIGNOS DE ALTA PROBABILIDAD DE TDAH NO TRATADOS CRONICAMENTE LO Q LLEVABA A ALTERACIONES CONDUCTUALES CUANDO VIVIR CON LA MAMA, MOTIVO POR EL CUAL LA NIÑA DECIA QUE TENIA ENFRENTAMIENTOS CON LA MAMA. ACTUALMENTE VIVE CON EL PAPA Y NUNCA ANTES HABIAN VIVIDO JUNTOS, EN EL INTERROGATORIO LA MAMA ES CIRCUNSTANCIAL TANGENCIAL Y EL PAPA ES DESCALIFICADOR DE LA ATENCION MEDICA OFRECIDA, DURANTE SU ESTANCIA LOS*

SINTOMAS APUNTAN A UN TDAH NO TRATADO Y NO A UNA DEPRESIÓN, PERO SU COMPORTAMIENTO ESTÁ INFLUENCIADO POR AMBOS PADRES. NO SE CONFIRMA NI DESCARTA MALTRATO PARA LA NIÑA PUES ESTA LABOR ES NETAMENTE JUDICIAL Y NO MÉDICA”.

Es menester recordar que a la señora ELIZABETH ANGARITA GARCIA se le había ordenado en la medida de protección No. 025-2020:

*“PRIMERO.- ORDENAR a ELIZABETH ANGARITA GARCIA, como medida de protección definitiva a favor de ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA las siguientes:*

- a. ABSTENERSE de realizar en lo sucesivo, cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica, contra ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA, en cualquier lugar donde se llegaren a encontrar.*
- b. ABSTENERSE de utilizar objetos contundentes (correas, chancletas, ganchos, etc.), para amenazar, agredir o intimidar a ANGIE LIZETH PINZON ANGARITA.*
- c. ASISTIR, a su costa a proceso psicoterapéutico a su EPS, entidad pública o privada que elija, con el objeto de manejar sus emociones, encontrar alternativas pacíficas de resolución de conflictos y aprender unas pautas de crianza adecuadas para la niña, con el uso de una comunicación asertiva. Debe asistir a un mínimo de doce (12) sesiones.*
- d. ASISTIR al curso de derechos de las víctimas en la Personería Distrital, Carrera 8 No. 19 - 45, el día 26 de marzo 2020 a las 8:00 am e. ASISTIR al taller de Pautas de Crianza de la Defensoría del Pueblo, llamar al 3147300 los primeros días de cada mes, o acudir a la Carrera 9 No. 16 - 21 a pedir la cita...”.*

En tal virtud, ante los comportamientos asumidos por la señora ELIZABETH ANGARITA GARCIA se tiene que no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado por la comisaría de conocimiento, teniéndose por demostrado el incumplimiento alegado.

Así, teniendo en cuenta que el presente trámite pretende la protección de la integridad de una menor de edad, como quiera que ésta ha sido afectada, es del caso imponer la confirmación de la providencia consultada respecto al incumplimiento decretado.

Como quiera que la sanción consiste en arresto, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Carta Política, según el cual, la privación de la libertad no puede efectuarse *“sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente”*, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley y de conformidad con las anotaciones jurisprudenciales, este juzgado proferirá la orden de captura y señalará el lugar de retención del demandado.

En este orden de ideas el juzgado atendiendo que el arresto conlleva la privación de la libertad personal del implicado, a efectos de cumplir la sanción decretada y generada por el incumplimiento de la medida de protección, se ordenará a la Estación de Policía que corresponda al lugar de residencia del querellado, proceda a la captura de la señora **ELIZABETH ANGARITA GARCIA con C.C. No. 27.602.523** para que sea recluido en arresto por el término de treinta (30) días en la Cárcel del Buen Pastor y/o Municipal de la ciudad donde sea capturada.

Para cumplir lo anterior se librarán los oficios respectivos a las autoridades de policía a fin de que den cumplimiento a lo aquí establecido y a su vez para que registren los datos del demandado. Cumplido lo anterior, se ordena la devolución de las diligencias a su lugar de origen.

Por lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión objeto de consulta.

**SEGUNDO: PROFERIR ORDEN DE ARRESTO** contra la señora **ELIZABETH ANGARITA GARCIA con C.C. No. 27.602.523**, por el término de treinta (30) días. **LÍBRENSE** las comunicaciones del caso con Destino a la Policía Nacional a fin de que en el menor tiempo posible dé cumplimiento a la orden aquí impartida.

**OFÍCIESE** en la misma forma al Director de la Cárcel El Buen Pastor y/o Municipal correspondiente de la ciudad donde sea capturado, a fin de que realice las gestiones del caso para garantizar las reclusiones ordenadas, hasta el término señalado.

Indíquese a las entidades referidas que. por tratarse de un arresto por incumplimiento en el pago de una sanción dentro de Medida de Protección, y no un arresto como pena por la comisión de un delito, no deben dejar a la señora **ELIZABETH ANGARITA GARCIA con C.C. No. 27.602.523**, a disposición de autoridad alguna sino comunicar lo pertinente respecto del acatamiento de la presente orden a la Comisaría de conocimiento. Para ello infórmese a cada entidad la Comisaría correspondiente.

**TERCERO:** CUMPLIDOS los días de arresto ordenados, déjese en libertad al encartado, al tenor de lo establecido en el artículo 11 de la ley 575 de 2000 reglamentado por literal b del artículo 6 del Decreto 4799 de 2011. **LÍBRENSE** las comunicaciones del caso con Destino a La Policía Nacional a fin de tomen atenta nota de la orden de libertad y la correspondiente cancelación de la presente orden en todos los registros correspondientes a fin de evitar posteriores capturas al sancionado por los mismos hechos por los cuales aquí se le sancionó.

**OFÍCIESE** en la misma forma al Director de la Cárcel El Buen Pastor y/o Municipal correspondiente, a fin de que realice las gestiones del caso para garantizar la LIBERTAD ordenada cumplido el término señalado.

**CUARTO:** CUMPLIDO lo anterior, téngase por CANCELADAS las medidas de arresto, para lo cual el Director de la Cárcel deberá comunicar a la Policía Nacional, para lo de su cargo.

**QUINTO:** Cumplido lo anterior, ENVÍESE el expediente a la Comisaría de origen de esta ciudad.

**NOTIFÍQUESE**



**CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ**  
**JUEZ**

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE BOGOTÁ  
NOTIFICACIÓN POR ESTADO – SECRETARÍA  
Bogotá D.C., **30 de MAYO de 2023**  
El auto anterior queda notificado a las partes por  
anotación en el ESTADO No. 85  
**ALISSON SANTAMARÍA CÁRDENAS**  
Secretaria

<sup>[1]</sup> Según el artículo 3° de la Ley 2157 de 2008, el daño psicológico es el “proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.”

<sup>[2]</sup> Dentro del cual se incluyen varias investigaciones realizadas en algunos países seleccionados como Brasil, Perú, Montenegro, República Unida de Tanzania y Japón, entre otros.

<sup>[3]</sup> OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 10.

<sup>[4]</sup> Según el informe: “En todos los países objeto del Estudio, entre el 20% y el 75% de las mujeres había experimentado, como mínimo, uno de estos actos, en su mayoría en los últimos 12 meses previos a la entrevista. **Los que más se mencionaron fueron los insultos, la humillación y la intimidación.** Las amenazas con daños físicos fueron menos frecuentes, aunque casi una de cada cuatro mujeres en los entornos provinciales de Brasil y Perú declaró que había sido amenazada. Entre las mujeres que informaron haber sido objeto de este tipo de violencia, al menos dos tercios había sufrido la experiencia en más de una ocasión.” Pág. 10.